

De números y controversias. Las estadísticas argentinas del Covid-19 en el marco de la emergencia

Claudia Daniel y Natalia Romero Marchesini*

RESUMO: En el escenario de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, las cifras estadísticas, los mapas y gráficos tuvieron un lugar destacado en la construcción de una narrativa de la crisis, en la gestión política de esa situación y en el debate público. En el cruce de la sociología política y la sociología de la cuantificación, este artículo examina las controversias, disputas y negociaciones que se generaron alrededor de los números oficiales de la pandemia en la Argentina. A partir del relevamiento de los medios de prensa con capacidad de influencia en la agenda política nacional, reconstruimos los debates públicos generados en torno de esos números, los posicionamientos de los actores involucrados y las dinámicas de división y oposición generadas. Finalmente, reflexionamos acerca de los efectos de las estadísticas en el tratamiento de la pandemia, en términos de legitimación de las decisiones públicas, la despolitización y la repolitización de la discusión pública.

Palabras clave: estadísticas oficiales, pandemia covid-19, controversias

ABSTRACT: In the context of the health emergency generated by the COVID-19 pandemic, statistical figures, maps and graphs had a prominent place in the construction of a narrative of the crisis, in the political management of that situation and in the public discussion. From the perspective of the sociology of quantification, this article examines the controversies, disputes and negotiations that were generated around the official numbers of the pandemic in Argentina. From the survey of the press media with the capacity to influence the national political agenda, we reconstruct the public debates generated around these numbers, the positions of the actors involved and the dynamics of division and opposition generated. Finally, we reflect on the effects of statistics on the treatment of the pandemic, in terms of legitimizing public decisions, depoliticizing and re-politicizing public discussion.

Keywords: Statistics, pandemic covid-19, controversies

1. Introducción

Desde su escala global, no es posible asimilar la pandemia de Covid-19 a un suceso uniforme u homogéneo, sino que, por el contrario, en cada país ésta adquirió distintas temporalidades y se vio afectada por diversas dinámicas, tanto las relativas al comportamiento del virus como sociales, políticas y culturales (Segata et al, 2021). No obstante, es posible reconocerla en términos generales como un “evento crítico”, una vivencia colectiva cargada de incertidumbre, en la que se da una alteración radical de la experiencia temporal (Neiburg, 2020). Las crisis son a su vez escenarios fluidos de disputas por la significación entre actores sociales que desde distintas posiciones procuran imputarle sentido a la situación, buscando incidir en el presente vivido y dar forma a expectativas de futuro (Visacovsky, 2017). En la crisis generada por la pandemia de Covid-19 los discursos estadísticos devinieron protagonistas de esas disputas. Para Emmanuel Didier (2020) nuestra percepción de (y nuestra reflexión sobre) la pandemia de Covid-19 estuvo guiada, o incluso moldeada, por las herramientas cuantitativas, aun cuando esas herramientas estuvieron escasamente interrogadas en relación a sus principios de construcción y a sus efectos sociales y políticos. En Argentina, las estadísticas vinculadas a contagios y fallecimientos por Covid-19, por ejemplo, circularon ampliamente y con particular intensidad procurando “reflejar” los acontecimientos en curso, al mismo tiempo que incidían en la sucesión de eventos posteriores. Ahora bien, si las métricas de riesgo epidemiológico de uso global (Mennicken, 2020) tendieron a homogeneizar la experiencia de la pandemia en el mundo, es importante admitir también que no estuvieron ausentes las sospechas, denuncias y críticas a la imagen de objetividad, rigurosidad y precisión a la que suelen estar asociados los indicadores, tasas y rankings en circulación. Generalmente, se señala que, a mayor popularización de las cifras estadísticas, se refuerza su condición de “caja negra”, es decir, su carácter de evidencia indiscutida, opacándose las condiciones sociales de su producción y las convenciones de equivalencia en las que se sustentan (Desrosières, 2004). Por un lado, los expertos suelen oponer cierta resistencia a mostrar la cara convencional (y, como tal, potencialmente controversial) de las estadísticas que producen porque suponen que dejarla al desnudo afectaría las bases de la autoridad y legitimidad social conseguidas. Por otro lado, cerrar la “caja negra” resulta necesario para facilitar la toma de decisiones y se vuelve vital para la acción política, ya que cualquier punto de incertidumbre (y potencial controversia) propio de su elaboración podría embarcar a las y los decisores en un sinfín de discusiones, obturando la acción. Sin embargo, en la Argentina, la polarización política que viene marcando el escenario democrático de los últimos años y constituye el origen de fuertes tensiones, una débil alfabetización estadística de la población y una historia de desconfianzas en los números oficiales, son factores que se combinan para generar cada tanto polémicas alrededor de las estadísticas públicas; discusiones sobre números que desnudan algunos de esos puntos de incerteza y, en ese sentido, abren parcialmente la “caja negra”, pero suelen terminar bloqueando el acceso a otros planos o pliegues de la misma.

En este artículo² analizamos las controversias, disputas y negociaciones que se generaron en torno a los números oficiales de la pandemia de Covid-19 desde el reconocimiento oficial del primer caso positivo en el país el 03 de marzo de 2020³ hasta el 31 de mayo de 2021. Creemos que nuestra propuesta de abordaje es una vía original e interesante de acceso a la dinámica política particular que engendró la situación de crisis social, económica y sanitaria provocada por la pandemia. Ese terreno estuvo inicialmente estructurado por un fuerte consenso entre las facciones políticas cuyos líderes convergieron en la valoración de la situación en términos de una emergencia, acordaban en la centralidad asignada al discurso científico y a los/as especialistas en el enmarcado del problema público en el sentido que le otorga Gusfield (2014) , y compartieron la consideración de la gestión pública “basada en evidencias”⁴ como un fundamento incuestionable. Sin embargo, a poco de avanzada la expansión del nuevo coronavirus el país encontró nuevos carriles de polarización política. El lenguaje estadístico se vio involucrado en esa bifurcación e incluso actuó disfrazando esas oposiciones valorativas e ideológicas como cuestiones técnicas o meramente numéricas.

Por otra parte, con este artículo buscamos dar cuenta de las propiedades políticas de los objetos estadísticos. Sostener que las estadísticas oficiales están enredadas en la vida política y social no quiere decir que estén politizadas en el sentido de ser manipuladas o estar contaminadas por intereses espurios, sino supone iluminar su naturaleza convencional y considerar, como destaca Starr (1987), que existen presupuestos, juicios o valoraciones políticas que están implícitos en la elección de qué medir, cómo medir, con qué frecuencia hacerlo y cómo presentar e interpretar esos resultados. La producción de estadísticas oficiales involucra una cadena de actores, decisiones y acciones, tanto como pone en juego consideraciones de propósito. Asimismo, la reconstrucción de la historia de la producción estadística de los Estados modernos gracias a los aportes de la obra de Alain Desrosières (2004, 2011), entre otros nos permitió constatar la existencia de una adecuación entre las formas de acción pública y las herramientas estadísticas. Sin embargo, como tendremos ocasión de mostrar en este artículo, las crisis son particularmente momentos de desajustes entre la descripción estadística y la gestión política. Los números disponibles no alcanzan a hacer inteligible la situación crítica; por lo que dejan de ser bases firmes para la acción pública (Didier, 2020b) y referencias estables para el debate colectivo (Desrosières, 2004).

2. Breve interregno metodológico: preguntas de partida, fuentes y propuesta de periodización

Nuestra indagación estuvo guiada por una serie de preguntas: ¿Cuándo surgieron las polémicas sobre los números oficiales del Covid-19 y por qué? ¿Quiénes participaron de ellas? ¿Con qué intensidad se dieron esas polémicas? ¿Cómo acompañaron la evolución de la pandemia en el país? ¿Se concentraron en algún momento en particular? ¿Cuáles fueron sus efectos políticos? Llegamos a estas cuestiones desde el campo emergente de los estudios sociales de la cuantificación, una

perspectiva teórica enriquecida de manera interdisciplinaria, sumamente apropiada para analizar los procesos de producción y comunicación de números como fenómenos sociales en sí mismos (Camargo y Daniel, 2021; Diaz-Bone y Didier, 2016; Espeland y Stevens, 2008). En este marco, en los últimos años han proliferado los estudios que se han volcado a analizar las controversias sobre números, los debates técnicos y políticos que rodean o más bien envuelven a cifras, índices e indicadores, particularmente luego del golpe que la crisis mundial de 2008 asestó a la credibilidad de las estadísticas.³

Para reconstruir el papel del lenguaje estadístico en la construcción de una narrativa sobre la crisis socio-sanitaria generada por la expansión del Covid-19 en Argentina, nuestra estrategia metodológica consistió en recopilar y analizar un conjunto de fuentes: 1) decretos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y normativa asociada a la gestión de la pandemia; 2) documentos oficiales vinculados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS)⁶ e informes de la situación epidemiológica publicados por el Ministerio de Salud de la Nación; 3) información proveniente de cuatro diarios de circulación masiva (Clarín, Infobae, Página 12 y La Nación) con la que construimos una base de prensa. Para este trabajo, seleccionamos, en particular, las notas que participaron de dinámicas controversiales para enfocarnos en ellas.

El registro y seguimiento de las polémicas sobre los números de la pandemia nos llevó a poner el foco en los cruces y contrapuntos entre el Poder Ejecutivo Nacional, a cargo del presidente Alberto Fernández (2019-2023), y la primera línea de conducción técnico-política de los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante CABA) y la provincia de Buenos Aires (en adelante PBA), portavoces protagonistas de esas disputas. Por tanto, este artículo de alguna manera privilegia el Área Metropolitana de Buenos Aires (en adelante AMBA). Este recorte se justifica en que, desde el inicio de la emergencia socio-sanitaria, el AMBA fue identificada como una zona de alto riesgo epidemiológico en la que se jugaría en buena medida el destino de la performance del Estado argentino ante la pandemia. En segundo lugar, por constituir una mancha urbana continua en la que confluyen dos unidades político-administrativas en ese momento gestionadas por partidos o alianzas políticas confrontadas — la CABA gobernada por el referente opositor del PRO, Horario Rodríguez Larreta, y la PBA alineada con el oficialismo nacional bajo la conducción de Axel Kicillof del Frente de Todos —; allí la pandemia impuso el desafío de la acción coordinada entre líderes políticos enfrentados.

Por último, en función del corpus construido, y atendiendo a la cronología de la evolución del Covid-19 en Argentina, establecimos una periodización con la intención de enmarcar los momentos de emergencia de polémicas alrededor de los números oficiales. La primera etapa comprende los meses de marzo y abril de 2020, y está básicamente marcada por la irrupción de la nueva situación de emergencia sanitaria y la perplejidad e incertidumbre generada por el nuevo coronavirus. Se destacan la medida de aislamiento social decretada de manera temprana por el PEN, con el objeto de postergar la propagación del virus, y la gran adhesión inicial de la ciudadanía. También, la divulgación de los cuidados preventivos básicos entre la población, sin consensos científicos sólidos acerca de las formas de contagio de la en-

fermedad y cómo prevenirla. En cuanto a los números que circulan en tanto herramientas para aprehender la evolución de la pandemia a nivel local, en esta primera etapa, predominan el número de contagios, la cantidad de varados en el exterior y la cuantificación de las muertes, mientras empiezan a asomar los rankings comparativos entre países. El manejo de la pandemia se presentaba como territorio de especialistas médicos, infectólogos/as y/o epidemiólogos/as, quienes conformaron el comité de asesoramiento de las autoridades del PEN. Consideramos como segunda etapa un período más extenso que transcurre entre mayo y septiembre de 2020 vinculado a cierta estabilización que alcanza la situación extraordinaria, que por momentos se ve alterada por umbrales numéricos que se traspasan con dramatismo y alteran el ánimo colectivo. En esta etapa, se despliegan un conjunto de números que deben comprenderse de manera integral: a la cantidad de casos, recuperados y muertes asociadas al Covid-19, se suman la tasa de reproducción o R_0 , la tasa de letalidad, el porcentaje de positividad, la cantidad de camas ocupadas en terapia intensiva, entre otros. Su diversidad moviliza en el espacio público una serie de esfuerzos más bien desarticulados de pedagogía estadística. Los diarios tuvieron un papel singular en este esfuerzo de alfabetización estadística invitando a sus audiencias a aproximarse a vocablos y conceptos técnicos complejos para entender qué estaba ocurriendo y, especialmente, qué se podía esperar en el futuro⁷. Tras admitir la necesidad de convivir con la pandemia, las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno impulsan lo que podríamos llamar una “protocolización de la vida cotidiana”. Finalmente, reconocemos un tercer período que se inicia luego de superado el pico de contagios de septiembre de 2020 y continúa hasta mayo de 2021 con la llegada de la segunda ola, en el que el horizonte de futuro que abren las vacunas modifica los principios de percepción social de la situación crítica. Comienzan a circular asiduamente los números de dosis aplicadas y de inscriptos en el registro de vacunación. Ahora bien, ¿qué pasó cuando las estadísticas, esas formas convencionales de referirnos al mundo, que aparecían como las referencias generales del pulso de la crisis, empezaron a ser cuestionadas y discutidas?

3. Disensos (sobre un piso de consenso) en torno de los números de la pandemia

Como cualquier espacio controversial, las polémicas alrededor de las estadísticas oficiales de la pandemia de Covid-19 descansaron sobre un zócalo común, ciertos sentidos compartidos por los protagonistas de las disputas, que estructuran los debates. Se trata de acuerdos implícitos, que subyacen a los desacuerdos claramente observables en la superficie. Durante el trascurso de la pandemia, las cifras de casos, fallecidos o camas ocupadas en unidades de terapia intensiva operaron como principios cognitivos comunes de apreciación (y de evaluación) de la situación que se estaba viviendo. Si tenemos en cuenta que los números no están aislados en el vacío, sino que existen en un espacio de competencia cognitiva, política y social, con otras formas de representación y apreciación de la realidad, es posible revalorizar el modo en que, durante la pandemia, las estadísticas se instalaron y ganaron lugar como

consensos cognitivos de fondo. Las autoridades de diversos signos políticos compartieron una orientación cognitiva afín en la medida en que prestaron atención a los mismos números (que eran ciertos números de los números posibles).

El apoyo en evidencia científica como base de la toma de decisiones políticas fue simétricamente reclamado como principio de legitimidad por quienes tenían responsabilidades de gestión a ambos lados de “la grieta” política⁸. A la hora de tomar una determinación, unos y otros recurrieron a las cifras estadísticas en tanto que justificaciones externas e impersonales de sus acciones con el objeto de “escapar”, “evitar” o “sortear” abiertos conflictos con la sociedad que gobiernan. Tal como señaló Niklas Rose (1991), en tiempos como éstos los números alcanzan un estatus privilegiado en las decisiones políticas. Las estadísticas fueron reclamadas para justificar y respaldar la toma de decisiones políticas por quienes estaban a cargo de distintos niveles de gobierno y representaban a diferentes agrupaciones políticas. A su vez, cada jurisdicción política (desde el nivel nacional hasta el municipal) devino en un “centro de cálculo” (Latour, 1987) que llevaba el recuento de testeos, casos de contagio, muertes y recuperados, índice de positividad, etc. Con fuerza singular, la pandemia introdujo métricas a la gestión local de los municipios que fueron transversales al arco político-ideológico.

Sin embargo, también circularon en el espacio público abundantes denuncias respecto de deficiencias informativas, “blanqueos” y “lagunas”, subregistros y desorden numérico durante todo el trascurso del año 2020. Las controversias alrededor de los números oficiales fueron relevantes no tanto porque constituyan un interés de especialistas abocados a establecer con precisión la propagación del virus o a anticipar picos de muertes o contagios, sino en tanto y en cuanto los números jugaron un rol significativo en la percepción cotidiana de la crisis y en la valoración social de las medidas políticas adoptadas en la gestión de la pandemia.

Siguiendo la definición de Alain Desrosières (2007), consideramos la cuantificación como una operación en dos tiempos: convenir + medir; donde el segundo momento, de orden más técnico, suele quedar dissociado del primero, que es de naturaleza política, jurídica y sociológica dado que es el momento en el que se establecen los acuerdos, los principios de equivalencia y las definiciones respecto de qué se está midiendo. Nos interesa desplazar esa fórmula a nuestra área de interés y distinguir analíticamente dos tipos de controversias que se dieron durante la experiencia colectiva de la pandemia: por un lado, las polémicas en torno a modos determinados de clasificar y, por otro lado, las tensiones relativas a las acciones de medir propiamente dichas (el acto de registrar, contar, aplicar operaciones aritméticas, o calcular tasas) que analizaremos en las secciones que siguen a continuación. Lo singular de un escenario de pandemia es que las clasificaciones (de “casos sospechosos”, de “casos positivos”, de “muertes por Covid-19”), que aseguran ante todo la equivalencia de los casos singulares necesaria para el trabajo de objetivación estadística (Desrosières, 2004), adquieren una dinámica de redefinición y cambio continuo bastante inusual que transcurre en paralelo a la evolución de aquello que se quiere medir: los efectos de la expansión del virus. Por su parte, los cálculos, estimaciones y proyecciones toman protagonismo en el espacio público, pero a la vez

se ven erosionadas (en cuanto a su credibilidad y utilidad) por las continuas postergaciones de la llegada del “pico” y el resultado fallido de los pronósticos, embarcándose en un proceso de descreimiento generalizado que asumimos tiene consecuencias en el nivel de adhesión a las medidas de cuidado propuestas por las autoridades políticas y sanitarias.

3.1. ¿Salud vs. economía? Desajustes entre descripción estadística y acción pública

Desde el inicio de la pandemia, las autoridades políticas del país definieron una estrategia para enfrentar el nuevo coronavirus. La meta que procuraba guiar el esfuerzo colectivo quedó expresada en el lenguaje estadístico: se trataba de “aplanar la curva” de contagios, para evitar una presión excesiva sobre un sistema de salud organizado sobre un esquema descentralizado, que se encontraba desfinanciado, desarticulado y fragmentado (Maceira, 2020). Priorizando el objetivo de eludir el colapso sanitario que se había dado en otros países del mundo, incluso en los más desarrollados, por sobre el control y seguimiento estricto de casos, y la multiplicación de los testeos, el PEN decretó una cuarentena estricta en todo el país (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, en adelante ASPO). A poco de establecerse, se inauguró una polémica en torno a la eficacia de esa estrategia, que ponía la cuestión en términos del dilema de “proteger” la salud de la ciudadanía o “salvar” la economía. Las conferencias de prensa de anuncio de la medida y de sus posteriores prórrogas ponían de manifiesto la preocupación del presidente Alberto Fernández por justificar su decisión de establecer un confinamiento generalizado y generar adhesión social a la medida movilizándolo argumentos estadísticos. En esos escenarios, las estadísticas fueron presentadas como principios de evidencia de la razonabilidad de esa decisión política; el discurso oficial buscaba instalar que esa decisión no era caprichosa ni arbitraria como criticaban algunos referentes políticos de la oposición. Por el contrario, se mostraba como una respuesta “objetivamente” derivada de (y confirmada por) los números y gráficos estadísticos. Las estadísticas eran movilizadas por el discurso oficial con el objeto de convencer a la sociedad sobre las “virtudes” de la estrategia elegida y se postulaban como evidencias de la “eficacia” del curso de acción seguido. Los argumentos concernientes a la efectividad buscaban contrarrestar o neutralizar las exigencias planteadas por una parte del arco político en nombre de “la libertad”. Este grupo ponía en cuestión la “razonabilidad” del ASPO, medida a la que imputaba su “desproporcionalidad” respecto del número de muertes provocadas hasta entonces por el nuevo coronavirus en el país⁹. La “eficacia” de la estrategia de confinamiento era cuestionada por discursos que destacaban la continuidad de la curva ascendente de casos, el alcance de umbrales estadísticos continuamente superados¹⁰ y traían a la discusión “los muertos en vida” que traería la caída abrupta de la actividad económica. Se trataba claramente de una controversia moral arropada de números, pero que no podía ser zanjada mediante el dictamen de los números. El *trade off* entre proteger la vida y mantener la actividad económica “encendida” era irreductible en términos cuantitativos. Las limitaciones de las estadísticas disponibles para brindar evidencias al debate entre salud y economía que-

daban a la vista. La temporalidad diversa de las objetivaciones estadísticas (la cuantificación diaria de casos y muertes por Covid-19 vs. el carácter anual de la medición del PBI o trimestral de la actividad económica) era uno, entre muchos otros aspectos, que volvían imposible la contrastación de esa relación inversa. Las estadísticas económicas nacionales disponibles no habilitaron a inferencias sobre las consecuencias en la salud de la paralización económica. Tampoco se promovió un enfoque de las estadísticas sanitarias capaz de recoger las características socio-económicas de la población afectada por el virus. Este vacío estadístico obturó el debate público acerca de la cuestión de las inequidades sociales y territoriales que estuvieron en la base de la experiencia de la pandemia en el país.

En síntesis, adicionando una más a las múltiples dimensiones de la crisis, podemos decir que la crisis se manifestó también como la incapacidad de los instrumentos estadísticos disponibles para hacer inteligible la experiencia de la pandemia, más allá de las coordenadas básicas provistas por las estadísticas epidemiológicas tradicionales¹¹. Las herramientas de reflexividad utilizadas no se ajustaron a los desafíos que enfrentaba la política pública ante la irrupción de la pandemia. Desde este ángulo, la crisis se presenta como un momento de evidente desajuste entre la descripción estadística y la acción pública. Como intuyen Neiburg (2020) y Didier (2020) en sus reflexiones contemporáneas sobre la pandemia, emergencias como éstas envuelven verdaderas crisis cognitivas, mudanzas radicales en las formas de conceptuar la realidad. En la medida en que las estadísticas no son adecuadas para el nuevo estado de cosas que se busca describir, se vuelve necesario también crear nuevas.

3.2. Emergencia de la “grieta estadística” y polémica acerca del número de testeos

Durante los meses de mayo y junio de 2020, se desarrolló un contrapunto en torno al número de testeos realizados que fue en paralelo al debate que enfrentaba salud con economía. El fuerte consenso inicial de buena parte del arco político fue sufriendo resquebrajamiento que tuvieron que ver con diferentes posturas acerca de la gestión política y sanitaria de la pandemia, en general, y el rastreo de casos positivos de Covid-19, en particular. Vinculado a la política de detección y seguimiento de casos, surgieron cuestionamientos: ¿Era suficiente el número de pruebas realizadas? ¿O se necesitaba un esfuerzo mayor para ampliar la cantidad de testeos? Frente a estos interrogantes no existían criterios unánimes, incluso, entre el grupo de infectólogos/as que asesoraban desde el comienzo de la pandemia al PEN¹². Se manifestaban dos posiciones: mientras algunos especialistas plantearon la necesidad de masificar los testeos, otros argumentaron que sería una epopeya llevar a cabo una estrategia de tal envergadura. A las acciones encaminadas a “rastrear, testear y aislar” a la mayor cantidad de personas posibles se contraponía la necesidad de maximizar el cuidado de los recursos escasos y planificar en detalle el modo de llevar adelante el rastreo de casos. En definitiva, la pregunta subyacente, pero no menos fundamental, era cuántas pruebas había que realizar para obtener una foto “fiel” (o lo más exacta posible) de lo que estaba sucediendo con la transmisión del virus. Ligado a ello, el porcentaje de casos confirmados (o de positividad, esto es, el número

de casos positivos en relación con el total de tests realizados) pasó a ser objeto de discusiones, habilitando opiniones divididas. Algunas de ellas expresaban los lineamientos de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud que recomendaba que esa cifra fuera menor o igual al 10%. Para algunos especialistas, lo que estaba en juego era lo ajustado de ese número para caracterizar el ritmo de expansión del nuevo coronavirus y evaluar las estrategias implementadas. Para otros, este número era sólo un dato que debía conocerse e interpretarse complementariamente con otra batería de indicadores.

Pero, la polémica en torno a la cantidad de testeos no se restringió exclusivamente a los expertos, sino que, por el contrario, involucró a actores de peso político. En reiteradas ocasiones las autoridades de los gobiernos de la PBA y CABA sostuvieron una confrontación en torno a las medidas adoptadas en esas jurisdicciones, con indefectibles repercusiones en el AMBA, que por momentos se expresaba como una “grieta estadística”. En mayo de 2020, la cantidad de testeos quedó en el centro de la justificación oficial del incremento de las cifras de contagios en un momento en que Rodríguez Larreta había decidido cierta flexibilización de la cuarentena en CABA. Esta medida era considerada como demasiado audaz por su par de la PBA, Axel Kicillof, y que afectaba el aceleramiento de los casos en el AMBA. El Ministerio de Salud de la Nación intervino en la discusión informando públicamente cuántos testeos se habían efectuado en cada uno de esos distritos, señalando que la tasa de positividad de la CABA triplicaba a la de su par bonaerense.¹³ La apertura de esa “grieta estadística” iba en dirección contraria al esfuerzo del gobierno nacional de instalar al AMBA como una misma unidad demográfica, territorial y epidemiológica, dificultado por la tensión que generaba que fueran dos jurisdicciones gobernadas por alianzas políticas enfrentadas. El fracaso de este intento puede ser visto también como una de las pequeñas “batallas culturales” perdidas por el oficialismo nacional.

En paralelo, desde fines de mayo de 2020, se dieron intervenciones públicas de diversos grupos de intelectuales, científicos, artistas, docentes y periodistas que se pronunciaron en relación a la evolución de la pandemia y la gestión política de la misma. Aunque no fueron protagonistas directos de una controversia numérica, traemos acá su presencia sin poder profundizar demasiado en el interés y posicionamiento desde el cual se manifestó cada uno, porque nos parece necesario para delinear el escenario de la discusión pública y dado que sus intervenciones propiciaron un clima o atmósfera de duda sobre los números oficiales. Tal fue el caso de la solicitada publicada en diversos medios de comunicación titulada “La democracia está en peligro” que se oponía a la continuidad del ASPO, considerándola una persecución y un atentado contra las libertades individuales. Allí, la noción de “infectadura”¹⁴ buscó sintetizar el rechazo de este grupo de intelectuales, científicos y periodistas a la estrategia del gobierno nacional, impugnando su “eficaz relato legitimado en expertos, seguramente acostumbrados a lidiar con escenarios que se asemejan a situaciones de laboratorio y ratones de experimentación, pero ignorantes de las consecuencias sociales de sus decisiones”.¹⁵ En contraposición a la imagen proyectada del “intelectual sin ataduras ni raíces”, como decía Pierre Bourdieu (2000: 70), los miembros de ese grupo no se situaban en el universo del puro desinterés, sino que compartía un posicionamiento político crítico al gobierno nacional.

Para agosto 2020, su discurso escaló hasta llegar a acusarlo de “terrorismo sanitario”. Entonces, sostenían que: “Del discurso ultra cientificista de los primeros meses [el PEN] pasó sin escala, pero con igual afán, a propagar relatos con *incompleta y sesgada* *contrastación empírica o científica* y hasta con *datos erróneos* destinados a mantener la reclusión y el sometimiento de gran parte de la población”.¹⁶ En contraposición a la primera carta mencionada, se congregó otro grupo de intelectuales, docentes, artistas y expertos más afín al gobierno para dar a conocer su respaldo al ASPO y lanzar el llamado a “Un esfuerzo adicional para salvar vidas”. En él resaltaban la importancia de cumplir con las medidas de cuidado y la necesidad de articular responsabilidades políticas (establecer una vigilancia activa de los casos y multiplicar los esfuerzos de rastreo), civiles (generar conciencia acerca de la propagación del virus y sus efectos) y periodísticas (evitar la difusión de información mal contrastada y/o falsa desde los medios de comunicación).¹⁷ En este último punto confluían, desde recorridos argumentativos contrapuestos, con el primer grupo en torno de la preocupación sobre la llamada “infodemia” dada por la abundancia de datos — muchas veces contradictorios, de dudosa procedencia o falsos — a los que estaba expuesta la población y que tenían el efecto de incrementar el miedo y la incertidumbre. Junto a esa gran variedad de información circulando, nos interesa hacer notar la presencia en paralelo de un “sentido común aritmético” (Cahen, Cavalin y Ruiz, 2020) que habilitaba a cualquier actor social (fuera lego o experto) a atribuirse autoridad para hacer referencias críticas sobre los números oficiales sin demasiadas credenciales, prestigio o trayectoria reconocida, incluso sin mostrar las fuentes de datos utilizadas ni hacer explícitos sus procedimientos de cálculo alternativos. Generalmente, el afán revisionista de los datos estadísticos estaba ligado a formas de relativización o minimización del peligro, falsas equivalencias y sobresimplificaciones (Feierstein, 2021), sin ningún tipo de control (externo o interno) de sus sesgos interpretativos. El gobierno reconocía el “esmerilamiento” de sus números oficiales y la expansión de cierto descreimiento en la sociedad — presumiendo efectos negativos en el nivel de adhesión a las medidas de aislamiento propuestas —, cuando en documentos oficiales el ministerio de Salud de Nación mencionaba la necesidad de fortalecer “la confianza y seguridad de la población en los procesos de acceso a la información”.¹⁸ La incertidumbre, la desorientación provocada por la “infodemia” y el acortamiento del horizonte temporal que había generado la pandemia daba importancia a recuperar esa confianza. Por otro lado, los dictámenes mediáticos sobre los números oficiales invitaban a reflexionar sobre el compromiso con la cuantificación. Si bien no se establecieron contra-cuantificaciones, como sucedió en otros países de la región¹⁹, desde algunos medios de comunicación se desarrollaron críticas radicales a las cifras oficiales que llegaron a tener repercusión internacional y acarrear consecuencias como la salida temporal de Argentina en una base de datos creada en la Universidad de Oxford (Our World in data).

3.3. Desacuerdos cognitivos y políticos en torno a las clasificaciones

Cuando las mediciones estadísticas son tomadas como “fotografías” o “reflejos” directos de la realidad, las operaciones de clasificación subyacentes suelen perderse de vista, llevando a subestimar sus implicancias en el trabajo de objetivación esta-

dística. Sin embargo, la literatura ha demostrado que las clasificaciones estadísticas oficiales se encuentran marcadas por el contexto social y político en el que son formuladas y por las formas de acción pública dominantes en ese momento histórico. La emergencia de nuevas clasificaciones y elaboraciones estadísticas está vinculada a consideraciones y luchas políticas que hacen que ciertos eventos, hechos o personas se vuelvan cuantificables (o no) en un momento determinado (Romero Marchesini, 2020). Así, la resonancia de la problemática del Covid-19 hizo imaginables nuevas taxonomías, impensables en otros escenarios.

El registro de casos sospechosos de Covid-19 supone una construcción de equivalencias que implica, entre otros aspectos, la armonización de criterios a la hora de establecer qué se clasifica y cómo se clasifica. ¿Qué se entiende por caso sospechoso? ¿Cuándo se considera de tal modo? Esta convención subyace al desarrollo de una práctica social de codificación mediante procedimientos generalmente estables, capaces de organizar y dar sentido a los acontecimientos en curso, que se sostienen en (y por) tramas institucionales e involucran una infraestructura administrativa considerable.²⁰ No obstante, esas operaciones adquieren una dinámica inusual durante el transcurso de una pandemia, con nomenclaturas cambiantes que reflejan diferentes modos de agrupar a las personas y enfrentan importantes desafíos de registro. La clasificación de caso sospechoso fue sufriendo modificaciones en paralelo al avance del coronavirus: al principio, se consideraba a las personas que presentaban determinados síntomas y habían viajado al exterior del país o tenían contactos cercanos con viajeros internacionales. Pero, a medida que los casos se multiplicaron y no fue posible establecer nexos con el exterior, comenzaron a considerarse casos por transmisión local, gestándose una nueva definición. Ahora bien, atada a esta evolución taxonómica y epidemiológica simultánea, y con el objetivo de evitar el surgimiento de nuevas cadenas de transmisión del virus, se establecieron pautas de acción vinculadas a definiciones íntimamente ligadas a la de caso sospechoso como, por ejemplo, la de “contacto estrecho”.²¹ La revisión de las clasificaciones, por un lado, tensionaba la pretensión de efectuar y sostener cuantificaciones diarias que “garantizaran” un registro directo e inmediato de la expansión del virus y, por el otro, afectaba la base de los cálculos y estimaciones proyectadas para el futuro.

Por otra parte, cuando la clasificación de caso sospechoso fue redefinida por la autoridad sanitaria nacional en acuerdo con las jurisdicciones provinciales, surgió una nueva polémica motivada por el disenso de las autoridades sanitarias porteñas. El nuevo criterio epidemiológico que definía casos positivos de Covid-19 sin la realización de un test incluía a aquellas personas que tuvieran síntomas y fueran convivientes o contactos estrechos de personas ya diagnosticadas con Covid-19 y/o que residieran en zonas donde hubiera transmisión comunitaria de la enfermedad. El ministro de Salud de CABA, Fernán Quirós, se resistió a implementar la nueva taxonomía aludiendo a la capacidad de su gobierno de hacer testeos y desestimó el criterio propuesto, mostrando una vez más las dificultades de gobernanza central del sistema sanitario: “No vamos a hacer uso de esa posibilidad, que es una práctica habitual en las epidemias, porque tenemos capacidad de hacer testeos y porque, cuando se confirma la enfermedad, hay que pedir esfuerzos complementarios a los

infectados y es demasiado...”.²² Por su parte, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, replicaba que “en una familia de cuatro personas, si una es positiva y a los dos días otra también tiene síntomas, la posibilidad de tener coronavirus es tan alta que hacer el testeo no tiene sentido”.²³ Aclarando, al mismo tiempo, que “eso no significa que la persona se autodiagnostica. Llama al 148, le hacen todas las preguntas y confirman el caso, e inmediatamente se toman las mismas medidas de aislamiento y seguimiento, los mismos derechos que si le hicieran el PCR”.²⁴ Desde la PBA enfatizaban en la necesidad de tomar decisiones sanitarias coordinadas con el ministerio de Salud de la Nación.

Por tanto, así como las definiciones y los criterios acerca de qué se cuenta y cómo se cuenta se iban ajustando con la evolución de la pandemia, esas modificaciones se convirtieron en objeto de tensión y disputa, volviéndose también foco de escrutinio público. Tal como señala Desrosières (2004), las clasificaciones, generalmente ocultas en las cadenas de producción estadística, emergen adquiriendo mayor visibilidad cuando forman parte de decisiones con consecuencias de extrema relevancia, participando de la construcción y estabilización del orden social mediante la puesta en acción de un lenguaje común que busca orientar y coordinar acciones individuales.

3.4. ¿Cuántos son los muertos? De retrasos y subregistros

Desde el mes de agosto de 2020 y anticipando la emergencia de la segunda ola de Covid-19 en el país, la atención (y la tensión) se concentró en el número de personas fallecidas y de ocupación de camas de unidades de terapia intensiva en centros sanitarios. Frente al incremento sostenido de esos números, se desarrolló una controversia en relación a la precisión y actualidad de las cifras oficiales que se agudizó al punto de constituirse en un verdadero conflicto entre las autoridades políticas de PBA, de CABA y el PEN.

Junto al seguimiento mediático de récords de cifras de muertes, surgieron cuestionamientos por inconsistencias en los registros oficiales y el retraso en la carga del sistema de vigilancia epidemiológica. Al inicio de la pandemia, expertos identificados con gestiones de distinto signo político habían admitido que cierta tardanza y/o subregistro eran plausibles en escenarios de emergencia, dada la sobrecarga que provoca en los actores del sistema de salud responsables del registro, más aún en un sistema sanitario como el argentino caracterizado por una débil “cultura de notificación”, menos extendida aún en instituciones privadas que en hospitales públicos.²⁵ Sin embargo, hacia agosto las dudas sobre cuántos muertos había generado la pandemia se instalaba públicamente de la mano de una preocupación creciente: ¿estábamos ante un pico de fallecimientos o constituían, en realidad, umbrales de antaño generados por datos que eran actualizados a posteriori?.²⁶ Los diarios denunciaban la supuesta distorsión entre lo real y lo difundido a través de las estadísticas oficiales; hacían referencia a demoras en la carga de datos, hecho que convertiría a las informaciones diarias en una “foto vieja”.²⁷ La sospecha respecto de si los números oficiales describían “fielmente” la situación, es decir, si aportaban una representación ajustada a los acontecimientos, ponía además en duda su objetividad como parámetro para evaluar la acción de gobierno.

Hacia fines de septiembre, las autoridades del ministerio de Salud bonaerense admitieron el problema del retraso en la carga de datos y señalaron que: “en el proceso de actualización, encontramos fallecidos que fueron confirmados como Covid-19 postmortem y en los registros de los hospitales y clínicas no habían sido actualizados. Por eso, esta semana se van a ir terminando de cargar, para evitar subregistros”.²⁸ Días más tarde, y dado el peso demográfico de la PBA, la actualización de los registros generó un fuerte salto en la tasa de letalidad a nivel nacional. La polémica no se hizo esperar. Desde los titulares de algunos diarios denunciaban “blanqueos estadísticos”, “sinceramiento de las cifras” y “limbos informáticos”. La oposición política presentó un pedido de interpelación para el ministro de Salud de la PBA en la Cámara de Diputados bonaerense fundada en la sospecha de la intención política del gobierno de ocultar la cantidad de muertes. En respuesta, el ministro de salud provincial, Daniel Gollán, aclaró públicamente que la aparición de ese número de muertes “no es una cuestión de datos que no se cargaron, sino de atraso. Lo que sucede es que aparecen casos que son de un mes y medio, dos meses atrás”. Por su parte, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, también respondió a las críticas de la oposición y calificó de “una actitud miserable y oportunista” a quienes plantearon que la provincia intentó ocultar muertos.²⁹ Además, en un intento por diferenciarse de las autoridades porteñas, los funcionarios políticos bonaerenses destacaban las mejoras realizadas al sistema de registro de información, recalcaban que no se trataba de un problema de transparencia y señalaban que en CABA “aun así no tienen la posibilidad de hacerlo al día como nosotros”.³⁰ Por su parte, otros especialistas señalaron que el gobierno porteño actualizaba por “goteo” las muertes, sumando alrededor de 899 muertes que no se habían contabilizado previamente sin ningún anuncio oficial, para evitar el impacto mediático.³¹

Para enmarcar esta polémica, es importante tener en cuenta que se consideraba que la cuantificación de las muertes por Covid-19 era el instrumento más apropiado para evaluar a posteriori la gestión política de la pandemia. Poner en cuestión la precisión del número total de fallecidos en el país arrastraba efectos en esa evaluación. Al mismo tiempo, circulaban rankings mundiales de cantidad de muertos por habitantes que exponían la *performance* argentina al habilitar comparaciones entre países. Una alta tasa de fallecidos por Covid-19 trasladaba a su vez una atribución de responsabilidades políticas al gobierno nacional. En este sentido, también resultaba valioso para el PEN despejar las dudas respecto de la posibilidad de subregistros y zanjar las controversias en relación al número de muertes. Además, las sospechas de subregistro de fallecimientos empezaban a acorralar a algunos gobiernos de la región latinoamericana.³² Las situaciones de saturación de los sistemas de salud que vivieron algunos países, el desborde de la atención sanitaria que desplazaba en el orden de prioridades a la tarea de anotación y certificación por parte de los profesionales de la salud, había tenido consecuencias a nivel de los registros epidemiológicos (más allá de la intención política, o no, de manipulación), lo que obligó a los gobiernos a profundas revisiones de sus sistemas de vigilancia epidemiológica (con el ejemplo emblemático de Perú³³). Este panorama también abonaba la postura que tomaba con escepticismo las cifras de muertes en la Argentina.³⁴ En este sentido, el gobierno nacional orientó esfuerzos a zanjar la controversia a través de la promoción

de estudios de exceso de mortalidad. A poco de iniciarse el 2021, la prensa local hizo eco de la factibilidad de esos cálculos.³⁵ El exceso de mortalidad es una metodología tradicional propia del campo científico de la epidemiología, es decir, forma parte del conjunto de convenciones profesionales. ¿Sería ésta finalmente la forma de cerrar la polémica respecto de la calidad del registro? ¿Se volvería la medida objetiva buscada para ponderar la gestión del gobierno argentino de la pandemia? Esa historia todavía está por escribirse.

3.5. La caída del lenguaje estadístico y el ascenso del lenguaje jurídico

La extensión en el tiempo de la pandemia produjo, por un lado, una creciente naturalización de los fallecimientos asociada a la permanente exposición de la sociedad argentina a esos números diarios y, por otro lado, un desgaste o pérdida de credibilidad de las cifras oficiales debido a las fuertes y abundantes críticas; es plausible pensar que ambos fenómenos repercutieron en el gradual abandono de las prácticas de cuidado por parte de la ciudadanía. Si así fuera, la experiencia argentina se distanciaría de lo observado por especialistas del campo de la sociología de la cuantificación en otras latitudes, donde la información estadística tuvo a su entender un impacto en la percepción subjetiva del riesgo, atribuido a la capacidad de los números de influir en la sensación de vulnerabilidad a la muerte, incidir en las conductas y en la aceptación pasiva de medidas restrictivas del ejercicio de derechos fuertemente defendidos por la sociedad en las democracias liberales avanzadas (Didier, 2020b). Por el contrario, para analistas locales, ante el peso de representaciones alejadas de los datos objetivos y asociadas con la exageración de las medidas de cuidado, sumado a las referencias públicas a “muertes imaginarias” y la contabilización de los días de una cuarentena para algunos inventada, la información numérica no tuvo la fuerza suficiente para establecerse como un observable masivo que permitiera identificar el peligro de la muerte en la Argentina (Feierstein, 2021). Bajo esta perspectiva, los números cada vez más elevados de muertes por coronavirus constituían alertas que no llegaban a convertirse en una perturbación significativa para la sociedad. Pareciera que los problemas se fueron incrementando al tiempo que las determinaciones basadas en representaciones estadísticas perdían potencia simbólica. Aún más, para Feierstein (2021) las conductas se presentaban como una constatación recursiva del sinsentido numérico: tan pronto como el miedo fue cediendo por la mejora de la situación o por la naturalización de ésta, los cuidados se fueron relajando y así fue como se dieron nuevos umbrales de contagios y fallecimientos. En ese escenario, las decisiones aperturistas del gobierno de CABA en desacuerdo con las políticas más restrictivas del gobierno de la PBA propiciaron tensiones que derivaron luego en posicionamientos infranqueables.

Los primeros meses de 2021 registraron porcentajes cada vez más elevados de ocupación de camas en unidades de terapia intensiva en los centros de salud del AMBA. Con la llegada de la segunda ola de contagios, ante el aumento de este indicador que traducía la saturación del sistema sanitario, las autoridades bonaerenses, en línea con las disposiciones del PEN, buscaron limitar la circulación de personas. Sin embargo, no lograron alcanzar un acuerdo con sus pares porteños.

Entonces, el debate se centró en la injerencia en la evolución de los contagios por Covid-19 de la presencialidad de los y las estudiantes en las aulas, una causalidad fundada en base a nuevas “pruebas estadísticas” (Desrosières, 2014). La particularidad de esta polémica radicó en que, aparentemente, los datos estadísticos eran capaces de sostener y brindar argumentos sólidos a las posiciones opuestas de un lado y otro de la Avenida General Paz. Cada autoridad política exponía números que respaldaban su postura frente a la modalidad de las clases que promovía (fuera presenciales o virtuales). En esta contienda, el presidente Alberto Fernández señalaba que el gobierno porteño: “no toma en cuenta el dato de la saturación del sistema sanitario [...] No podemos hacernos los distraídos y mucho menos mentir o fingir con las estadísticas. La única estadística que cuenta es la de la persona que está 20 horas dando vueltas en una ambulancia buscando una cama donde terminar siendo atendida.”³⁶ Por su parte, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta señalaba que “la curva de casos en la Ciudad había dado buenas señales y que ya no estaba creciendo”.³⁷ El intento de llegar a un acuerdo intercambiando “pruebas estadísticas” no llegó a buen puerto. Ante la decisión del PEN de pasar la educación a modalidad virtual, el gobierno porteño decidió recurrir a los tribunales, externalizando la disputa y someténdola a un nuevo arbitraje.

Así, entre marzo y abril de 2021, con el inicio de la segunda ola de contagios, se modificó el eje de las discusiones, generando que el lenguaje jurídico desplazara a segundo plano al estadístico. En este punto, se presentan nuevas instituciones, nuevos actores y nuevos escenarios: si en los momentos iniciales el manejo de la pandemia era el campo privilegiado de epidemiólogos, en éste se ingresa al terreno de los tribunales con la judicialización de la política sanitaria en tanto vía de resolución del nuevo conflicto generado. La suficiencia o no de las “pruebas estadísticas” quedaba de ahora en más sujeta a criterio jurídico.

4. A modo de cierre

Pese a las abundantes críticas, cabe notar que en el período que hemos analizado del trascurso de la pandemia de Covid-19 no surgieron en el país productores de números alternativos capaces de competir con los oficiales. Esta no era una posibilidad remota en la Argentina, teniendo en cuenta sus antecedentes y que, en países vecinos como Brasil la desconfianza en las cifras del presidente Jair Bolsonaro y las denuncias de subregistro de muertes, condujeron a prácticas *stat-activistas*, es decir, experiencias de generación de estadísticas en confrontación con la autoridad orientadas a designar otra realidad agregada diferente a la oficial (Bruno, Didier y Prévieux, 2014).³⁸ Al trasluz de otras experiencias de la región, Argentina tuvo matices propios y singularidades; uno de ellos, sin dudas, fue el tipo de polémicas que se gestaron alrededor de los números oficiales. En términos de los actores que protagonizaron el espacio controversial, este trabajo nos permitió detectar un desplazamiento en tres tiempos: de los expertos o especialistas a las autoridades y figuras políticas de las agencias gubernamentales, para finalmente estacionarse en una disputa jurídica que dio la palabra a representantes judiciales. En esa traslación, el dis-

curso estadístico encontró su límite: las estadísticas dejaron de ser esas referencias sólidas, externas e imparciales que actúan como mecanismos técnicos automáticos para volver operativas las decisiones. En su reemplazo, fallos judiciales vinieron a dirimir las tensiones políticas emergentes.

Inicialmente, nos preguntamos si las polémicas se concentraron en ciertos momentos de la experiencia social de la pandemia. La reconstrucción de las disputas discursivas alrededor de números nos indica que cada etapa que definimos analíticamente presentó al menos una polémica. La temporalidad o el ritmo de la pandemia no habría incidido en términos de un incremento o declinación de la intensidad polémica, sino en poner en foco de la mirada pública a ciertos números en particular: inicialmente, el número de testeos; luego, el de muertes; más tarde, el de camas de terapia intensiva.

Resta compartir una reflexión de carácter general con respecto a los efectos políticos de las polémicas aquí analizadas, que apunta a iluminar el interjuego particular en el que se vieron envueltos los números de la pandemia entre su dimensión política, la *despolitización* que encauzan y la *repolitización* que generan. Primero, partimos de sostener que consideraciones de propósito, elecciones y presupuestos intervienen en la selección de aquello que se mide y cómo se mide, incluso en una pandemia. Subyacen a esos números acuerdos intersubjetivos sobre el modo de clasificación de las personas y los hechos que se ve modificado a lo largo del tiempo. Los aspectos convencionales de las estadísticas insertan a ese objeto en una trama política. No es necesario acudir a conspiraciones premeditadas o prestar atención a intenciones ocultas para reconocer su dimensión política. Las estadísticas son objetos técnicos de nuestra cultura que tienen cualidades políticas, que movilizan juicios, formas de apreciación y evaluación, así como convalidan modos de autoridad específicos. Sin embargo, en otro sentido, los números son promotores de una despolitización tanto del debate público como de la acción pública, incluso en la gestión de una crisis socio-sanitaria inédita como esta. Con relación a los contrapuntos y discusiones que impuso (y expuso) la pandemia, los números se mostraron como recursos para eliminar o esconder el carácter moral o ideológico de los desafíos y dilemas abordados; desde este punto de vista, los *despolitizan*. Con relación a la acción pública, las tasas e indicadores estadísticos fueron, sin duda, un medio o recurso para priorizar problemas y emitir juicios. También fueron utilizados como mecanismos técnicos, supuestamente neutrales y automáticos, para conducir acciones (a distancia) desde el momento que procuraron regular (desde el centro) las decisiones de los gobiernos locales en relación a la flexibilización o no del ASPO. En el terreno de la acción pública, los indicadores estadísticos operaron como principios externos de regulación y/o coordinación de la acción. Pero, luego se *repolitizan* cuando surgen las impugnaciones y denuncias de subregistro, de “desorden numérico” o de “blanqueos estadísticos”, es decir, cuando los números se vuelven objeto de sospechas, críticas y desconfianzas. En el plano de la discusión pública, si en un primer movimiento los números despolitizaron o “disfrizaron” los dilemas a enfrentar con la pandemia, es cierto también que esos números son susceptibles de *repolitizarse* cuando son utilizados por las distintas facciones políticas para impugnar los argumentos del otro, para criticar los fundamentos de su accionar, para erosionar su autoridad política.

* **Claudia Daniel** es socióloga, Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigadora adjunta del CONICET en el Centro de Investigaciones Sociales (CIS-CONICET/IDES). Es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Su área de interés es la socio-política de las estadísticas. Sus investigaciones previas estuvieron orientadas al estudio de las instituciones de la estadística pública en Argentina en perspectiva histórica. Mail: cdaniel@ides.org.ar

* **Natalia Romero Marchesini** (FaHCE/UNLP) es Profesora y Licenciada en Sociología. Es doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata. Desarrolla tareas de asesoramiento, capacitación y producción de información en la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Su área de interés es la socio-política de las estadísticas. Sus investigaciones están orientadas al estudio de las mediciones oficiales de femicidios y travesticidios en Argentina. Mail: nrromeromarchesini@gmail.com

Notas

¹ Para profundizar en antecedentes de polémicas en torno a las estadísticas oficiales en la Argentina, véase Daniel, 2013; Pérez, 2013.

² La investigación en que se basa este artículo fue realizada en el marco del proyecto PISAC COVID-19 N°40: “El sostén público a la supervivencia de los hogares y unidades económicas en la urgencia. Iniciativas, mediaciones y alcances de la asistencia en perspectiva comparada”, apoyado por Agencia I+D+i.

³ Pocos días después, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud caracterizó la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 como una pandemia.

⁴ La *evidence-based policy* es un enfoque relativamente novedoso que destaca la necesidad de que el diseño de políticas públicas esté informado por evidencia objetiva y que ha ganado fuerza gracias a su implementación en diferentes ámbitos de la administración pública en países pioneros como el Reino Unido y los Estados Unidos. Si bien está emparentado con el paradigma del *New Public Management* (o Nueva Gestión Pública), se orienta principalmente al prove-

chamiento de los sistemas de información y las bases de datos disponibles por el Estado en la planificación de las acciones de gobierno.

⁵ Para acceder a algunos ejemplos, puede visitarse los artículos del número 7 de la revista *Partecipazione & Conflitto* publicado en 2014 con una contribución del sociólogo francés Alain Desrosières.

⁶ La elaboración de las cifras oficiales se apoya en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) que cuenta con un módulo específico, el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), para la carga, revisión, monitoreo, análisis y difusión de información sobre los problemas de salud ocasionados por el coronavirus, que el área de la Dirección de Epidemiología e Información Estadística utiliza para la confección de reportes diarios y salas de situación, que se publican en la página oficial del ministerio de Salud de la Nación.

⁷ Véase, a modo de ejemplo: La Nación, “Los diez números que definen el escenario epidemiológico y que son claves para saber dónde estamos parados”, 26 de mayo de 2020 y Clarín, “Coronavirus: qué es la curva

logarítmica, la información que mira la Ciudad para tomar decisiones políticas”, 27 de mayo de 2020.

⁸ La idea de “grieta” remite al clivaje kirchnerismo/anti-kirchnerismo que marcó la dinámica de oposición política de los últimos años en la Argentina. Se trata de un término incorporado al sentido común, gracias a su popularización por los medios masivos de comunicación, que en realidad resume una gama más amplia de diferencias ideológico-políticas presentes en la sociedad. La noción de “grieta” es en sí misma un modelo interpretativo del conflicto político y las divisiones sociales presentes en la sociedad argentina contemporánea. Para profundizar, ver: Artese et al., 2019.

⁹ Al momento de anunciar el ASPO, el día 20 de marzo de 2020, Argentina registraba 158 casos positivos y 3 fallecimientos. (Ministerio de Salud, 2020).

¹⁰ Véase, por ejemplo, Clarín, “Coronavirus en Argentina: ya hay más de 1.100 infectados en el país y aún son mayoría los casos importados”, 1 de abril de 2020. La Nación, “10.000 muertos por coronavirus. Así se ubica la Argentina en el comparativo de fallecidos por país”, 7 de septiembre de 2020. Página 12, “Coronavirus: ¿por qué Argentina superó el millón de contagios?”, 21 de octubre de 2020. Clarín, “Coronavirus: Argentina llegó a 1,5 millón de casos registrados, pero calculan que los reales son más de 11 millones”, 14 de diciembre de 2020.

¹¹ Creemos que es posible hipotetizar que los indicadores privilegiados para hacer legible la experiencia de la pandemia guardan relación con la contundente primacía de la visión médica sobre el fenómeno y el perfil del Comité científico-experto que asesoró al PEN, formado de manera excluyente por médicos infectólogos y epidemiólogos, de trayectoria reconocida a nivel local e internacional. Esta composición orientó de alguna manera la mirada: operó una selección respecto de qué medir y con qué herramientas hacerlo.

¹² Véase, por ejemplo, las opiniones opuestas de los miembros del Comité de

Expertos Covid-19 (COE) en Clarín, “El dilema de la cuarentena infinita: es un éxito y nadie sabe cuándo va a terminar”, 14 de abril de 2020.

¹³ Infobae, “Coronavirus en Argentina: el Ministerio de Salud se sumó a la polémica e informó cuántos tests se hicieron en la Capital y en la provincia de Buenos Aires, 19 de mayo de 2020.

¹⁴ Este término resulta de la conjunción del comienzo de una palabra (infección) con el final de otra (dictadura) logrando, por un lado, insertarse muy bien en el universo simbólico de la pandemia al aludir a la infección de un virus (en este caso, el nuevo coronavirus), pero a la vez señalar a un reducido grupo del campo de especialistas en la disciplina que formaban parte del comité asesor del presidente para la gestión política de la pandemia; mientras que, por otro lado, asimilaba esa gestión a un modo autoritario de ejercicio del gobierno que se suponía se había puesto de manifiesto en la decisión de encarar el riesgo epidemiológico que traía la pandemia al país con la elección de una estrategia de confinamiento estricto de la población. Es una palabra creada para designar un “nuevo” evento y denunciar, al mismo tiempo, la acción de gobierno desde el punto de vista de una posición en el campo intelectual nacional (Bourdieu, 1990).

¹⁵ Clarín, “La democracia está en peligro, la carta abierta de intelectuales y científicos que alerta sobre el eficaz relato de la infectadura”, 29 de mayo de 2020.

¹⁶ Clarín, “Intelectuales y científicos ahora acusan al Gobierno de ejercer terrorismo sanitario”, 31 de agosto de 2020. El énfasis es nuestro.

¹⁷ Página 12, “Respuesta a la infectadura: científicos e intelectuales en apoyo a la cuarentena”, 1 de junio de 2020.

¹⁸ Infobae, “El Ministerio de Salud cambió el esquema de los reportes y dejó de informar los muertos por coronavirus en el parte matutino”, 21 de septiembre de 2020.

¹⁹ Sobre Brasil, ver Camargo, Motta y Mourao, 2021.

²⁰ En el marco de la emergencia sanitaria, la necesidad de contar con un reporte actualizado diariamente llevó a reformulaciones que desembocaron en la modificación de la Ley 15.465 a través de la Resolución 680/2020. El ministerio de Salud de la Nación incorporó en la nueva normativa el Covid-19 al régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria en todas sus etapas, desde la sospecha del caso hasta el seguimiento de su evolución, por lo que todo caso sospechoso constituye un evento de notificación obligatoria, inmediata y completa al SNVS.

²¹ Éstos referían a personas que hubieran permanecido a una distancia menor a 2 metros durante al menos 15 minutos con un caso confirmado de Covid-19 mientras el caso presentaba síntomas. Véase Ministerio de Salud de la Nación (s/f), “Definición de caso sospechoso, confirmado y contacto estrecho”.

²² La Nación, “La nueva definición de caso positivo generó otro roce entre Nación, Ciudad y Provincia”, 7 de agosto de 2020.

²³ La Nación, “La nueva definición de caso positivo generó otro roce entre Nación, Ciudad y Provincia”, 7 de agosto de 2020.

²⁴ PCR, refiere a una sigla en inglés cuya traducción al español significa “Reacción en Cadena de la Polimerasa”. Se trata de una prueba de diagnóstico realizada en laboratorios que permite detectar si una persona está infectada o no con coronavirus.

²⁵ Clarín, “Coronavirus en Argentina: ¿Por qué puede haber demoras en el registro de los muertos?”, 7 de abril de 2020.

²⁶ La Nación, “Coronavirus en la Argentina: ¿Récord de muertos o “blanqueo” de las estadísticas?”, 12 de agosto de 2020.

²⁷ Infobae, “Muertos por coronavirus: por el retraso en la carga de datos, las cifras de hoy son una foto vieja”, 23 de agosto de 2020.

²⁸ Clarín, “Coronavirus en Argentina: por qué hay demoras en el registro de las muertes”, 23 de septiembre de 2020.

²⁹ Clarín, “Salto en las cifras. La oposición pidió interpelar al ministro Daniel Gollán

tras el salto de 3.500 muertes por coronavirus en la Provincia de Buenos Aires”, 29 de septiembre de 2020.

³⁰ Clarín, “La polémica por las cifras oficiales. Daniel Gollán insiste en que la Ciudad tiene más muertos por coronavirus que los que informa”, 5 de octubre de 2020

³¹ Página 12, “Coronavirus: la CABA corrige “por goteo” el subregistro de muertes”, 31 de octubre de 2020.

³² Véase, por ejemplo, La Nación, “Muertes flotantes. La trampa de los números sobre el coronavirus en América”, 30 de julio de 2020.

³³ Para el caso de Perú, véase La Nación, “Perú registra la tasa de muertes más alta del mundo tras revisar la cifra de fallecidos”, 31 de mayo de 2021. Es importante recordar también que cuando el Reino Unido incluyó retroactivamente las muertes no hospitalarias, la cifra de ese país se disparó.

³⁴ Véase, por ejemplo, Clarín, “¿Qué países mienten y cuáles dicen la verdad sobre la cantidad de infectados y muertos por coronavirus?”, 10 de mayo de 2020.

³⁵ Ver, por ejemplo, Infobae, “Transparencia de datos: ¿cómo se cuentan las muertes por Covid-19?”, 20 de enero de 2021 o Página 12, “Coronavirus: la mejor manera de comparar a la Argentina con Brasil, Chile o Estados Unidos”, 12 de febrero de 2021.

³⁶ Clarín, “Alberto Fernández: La única estadística que cuenta es la de las personas que pasan horas buscando una cama”, 24 de abril de 2021.

³⁷ Clarín, “Alberto Fernández: La única estadística que cuenta es la de las personas que pasan horas buscando una cama”, 24 de abril de 2021.

³⁸ Desde junio de 2020, en respuesta a que Bolsonaro cancelara la divulgación de boletines informativos, un consorcio mediático federativo difunde sus propias estadísticas de la pandemia, con gran repercusión pública, de manera de continuar las series y ofrecer un número creíble a la ciudadanía (Camargo, Motta y Mourao, 2021).

Referencias bibliográficas

- Artese, M., Castro Rubel, J., Tapia, H. (2019). Explorando “la grieta”. Representaciones de las divisiones y la conflictividad social en miembros de la pequeña burguesía urbana. *Estudios Sociales*, 56, 131-154.
- Bourdieu, P. (2000). ¿Cómo liberar a los intelectuales libres? En *Cuestiones de Sociología* (pp. 67-78). Madrid: Istmo.
- Bruno, I., Didier, E. & Prévieux, J. (2014). *Stat-activisme. Comment lutter avec des nombres*. Paris: Zones.
- Cahen, F., Cavalin, C., Ruiz, E. (2020). Des chiffres sans qualités? Gouvernement et quantification en temps de crise sanitaire. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02659791>
- Camargo, A. D. P. R., y Daniel, C. (2021). Social studies of quantification and its implications in sociology. *Sociologías*, 23(56), 42-81.
- Camargo, A. D. P. R., Motta, E. D. S. M. G. y Mourão, V. L. A. (2021). Números emergentes: temporalidade, métrica e estética da pandemia de Covid-19. *Mediações-Revista de Ciências Sociais*, 26(2), 311-332.
- Daniel, C. (2013). *Números públicos. Las estadísticas en Argentina (1990-2010)*. Ciudad de Buenos Aires, FCE, 2013.
- Desrosières, A. (2004). *La política de los grandes números*. Barcelona: Editorial Melusina.
- Desrosières, A. (2007). Comparer l'incomparable. Essai sur les usages sociaux des probabilités et des statistiques, in Touffut J.P. (éd), *La société du probable. Les mathématiques sociales après Augustin Cournot*, Albin Michel, Paris, pp. 163-200.
- Desrosières, A. (2011). Las palabras y los números: para una sociología de la argumentación estadística. *Apuntes de Investigación del CECYP*, (19), 75-101.
- Desrosières, A. (2014). Statistics and social critique. *Partecipazione e Conflitto*, 7(2), 348-359.
- Diaz-Bone, R.; Didier, E. (2016). The sociology of quantification. Perspectives on an emerging field in the social science. *Historical Social Research*, 41(2), 7-26.
- Didier, E. (16 de abril de 2020). Politique du nombre de morts. AOC, *Analyse Opinion Critique*. <https://aoc.media/opinion/2020/04/15/politique-du-nombre-de-morts/>
- Didier, E. (04 de noviembre de 2020b). Are Social studies of quantification useful to understand the Covid pandemics? [Seminar] University of Cambridge.
- Espeland, W.; Stevens, M. (2008). The sociology of quantification. *Arch. europ. sociol.*, 49(3), 401-436.
- Feierstein, D. (2021). *Pandemia. Un balance social y político de la crisis del Covid-19*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Gusfield, J. (2014). *La cultura de los problemas públicos. El mito del conductor alcoholizado versus la sociedad inocente*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- Latour, B. (1987). *Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Maceira, D. (2020). Caracterización del Sistema de Salud Argentino. Debate en el contexto Latinoamericano. *Revista Estado y Políticas Públicas*, VIII(14), 155-179: mayo-septiembre. https://revistaeypp.flasco.org.ar/files/revistas/1590800112_155-179.pdf
- Ministerio de Salud de la Nación (s/f). Definición de caso sospechoso, confirmado y contacto estrecho. <https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/caso-sospechoso-confirmado-y-estrecho>
- Ministerio de Salud de la Nación (2020). Reporte diario N°16. Situación de Covid-19 en Argentina. <https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informes-diarios/reportes/marzo2020>
- Mennicken, A. (08 de diciembre de 2020). Uncertainty, Risk and the Politics of Numbers in Post-Pandemic Societies. [Seminar]. University of Cambridge.

Neiburg, F. (2020). Vidas, economía e emergência. *Boletim Ciências Sociais e Coronavírus, São Paulo*, n. 22. http://anpocs.com/images/stories/boletim/boletim_CS/Boletim_n22.pdf

Pérez, S. (2013). Controversias en torno a los métodos de medición y a las medidas oficiales de la pobreza en la Argentina reciente. *Perfiles Latinoamericanos*, 41, 95-122.

Romero Marchesini, N. (2021). Muertes que cuentan. La producción de números de femicidios, transfemicidios y travesticidios como política de Estado. *Mediações-Revista de Ciências Sociais*, 26(2), 256-271.

Rose, N. (1991). Governing by numbers: Figuring out democracy. *Accounting, organi-*

zations and society, 16(7), 673-692.

Segata, J., Schuch, P., Damo, A.S. y Vicitora, C. (2021). A Covid-19 e suas múltiplas pandemias. *Horizontes Antropológicos*, 27(59), 7-25.

Starr, P. (1987). The Sociology of Official Statistics. En Alonso, W. y Starr, P. *The politics of numbers*. New York: Russell Sage Foundation.

Visacovsky, S. (2017). Intérpretes públicos, teodiceas de la nación y la creación del futuro en la crisis de inicios del siglo XXI en Argentina. En A. Castillejo Cuéllar (Ed.), *La ilusión de la justicia transicional: perspectivas críticas desde el Sur global* (pp. 373-410). Bogotá: Uniandes.